

Tensiones y contradicciones del tercer gobierno peronista en Córdoba, 1973-1976 ¹

Alicia Servetto²

Publicado en: César Tcach (coord.), *Córdoba Bicentenario: claves de su historia contemporánea*, Córdoba: Centro de Estudios Avanzados y Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, 2010, pp. 389-416

1. Presentación

El 25 de mayo de 1973 inauguraba la sesión de las cámaras legislativas el flamante gobernador electo, Ricardo Obregón Cano. Junto a su compañero de fórmula, Atilio López, y con el apoyo de la juventud radicalizada, prometieron construir el camino hacia la revolución socialista. Un año después, las sesiones legislativas fueron inauguradas por el interventor federal, Duilio Brunello. En su mensaje, habló de la reconstrucción nacional y urgió a la pacificación. Al año siguiente, mayo de 1975, otro interventor federal, Raúl Lacabanne, pronunció el discurso de la apertura de la legislatura provincial. Recalcó que Córdoba debía insertarse en el proceso de unidad nacional bajo el consenso de la comunidad organizada del Estado nacional justicialista. En mayo de 1976, Córdoba seguía intervenida, pero el interventor fue nombrado por un gobierno militar: no hubo discurso de inauguración de las sesiones legislativas, éstas habían sido clausuradas.

Tres años de gobierno constitucional, un gobernador electo y tres interventores federales, sumando a Raúl Bercovich Rodríguez que gobernó la provincia desde septiembre de 1975 hasta el golpe militar. Cantidad que podría elevarse a cuatro si consideramos, también, el día que gobernó el general Luciano Benjamin Menéndez, comandante del III cuerpo de Ejército, designado por el presidente provisional, Italo Luder, para garantizar el traspaso del mando de Raúl Lacabanne a Raúl Bercovich Rodríguez. Ninguno de los gobernantes logró concretar sus objetivos ni armar una coalición dominante que le permitiera ejercer y construir espacios de poder.

El peronismo había retornado al poder, pero ello tenía, para los distintos actores que integraban el Movimiento, significados polisémicos. Perón, después de 18 años de proscripción, había vuelto al país, pero no para hacer la revolución, sino para la conciliación de los opuestos, o mejor, para la reconstrucción nacional, según sus expresiones. El líder peronista regresó convencido de que su tarea fundamental era “poner de acuerdo a los argentinos” en el que sólo tendrían cabida todas las “fuerzas sociales que se colocaran dentro de la ley y accionaran dentro de ésta”. Pero mientras exhortaba a combatir la guerrilla políticamente, por el otro exigía a sus propias filas no sacar los pies del plato, porque entonces tendría derecho a darles con todo. Sin embargo,

¹ El presente artículo es una versión sintetizada y actualizada que incluye algunas fuentes nuevas del libro del autor *De la Córdoba combativa a la Córdoba militarizada, 1973-1976*, Córdoba, Ferreyra Editor, 1998.

² Doctora en Historia, UNC. Profesora Adjunta en el CEA-UNC y en la Escuela de Ciencias de la Información, UNC. Integrante del Programa de Historia Política de Córdoba, CEA-UNC.

Perón no pudo contener las fuerzas centrífugas que él mismo había alentado a crear. El enfrentamiento entre los distintos sectores peronistas, con proyectos radicalmente opuestos y mutuamente excluyentes, dominó el campo político, dirimiendo la contienda en las mismas instituciones estatales, agudizando, aún más, su propia crisis. La puja por ocupar cargos y controlar posiciones en los organismos públicos, nacionales, provinciales o municipales, en tanto fuente de recursos políticos, económicos y simbólicos, pero también espacios de poder, constituyó la trama central de los conflictos provinciales durante el tercer gobierno peronista, siendo Córdoba uno de los nudos neurálgicos del enfrentamiento interno, al extremo que el presidente Perón llevó a calificar a Córdoba como “un foco de infección”. La metáfora organicista, utilizada con atenta y consciente recurrencia, funcionó como marco habilitador para eliminar el disenso, por intermedio de la fuerza, en una de las provincias más movilizadas y politizadas de la Argentina setentista.

Así, el retorno del peronismo implicó la apertura de un proceso complejo, marcado por aceleración del tiempo político y jaqueado por los conflictos, en muchos casos, como resultado del enfrentamiento intraperonista, cuya forma de resolución fue vaciando de contenido al mismo proceso institucional, no sólo del que formaban parte, sino también del que debían dirigir en tanto partido de gobierno.

2. Al ritmo de las sirenas fabriles

Hacia mediados de la década del cincuenta, Córdoba se había transformado en la segunda concentración industrial del país, con especial desarrollo de las industrias alimenticias, automotrices y químicas eran las ramas más desarrolladas. IAME (Industrias Aeronáuticas y Mecánicas del Estado)³ fue la primera gran planta industrial de Córdoba. Allí se fabricaron aviones en cantidad superior a la de su anterior conformación, pero también motores de todo tipo: el tractor Pampa, el automóvil Institec, el Rastrojero Diesel y la moto Puma. Con fuerte impulso estatal, la industria de Córdoba dio otro salto cuantitativo con la autorización de radicación de empresas extranjeras, tales las de Industrias Kaiser Argentina (IKA) y Fiat a finales de la década del 50.

El boom industrial generó la mayor concentración de trabajadores industriales del país, al margen de Buenos Aires. En 1970, el 35% de la mano de obra estaba empleada en la industria, una cifra importante frente al 19% ocupada en comercio, bancos y compañías de seguro, 35% en servicios y 10% en ocupaciones diversas. Por cierto, la clase obrera local no se limitaba a las industrias mecánicas. También incluía trabajadores calificados en los talleres ferroviarios de la ciudad, energía eléctrica y trabajadores gráficos junto a la gran masa de obreros no calificados en las demás ramas industriales.

Al ritmo acelerado de las fábricas, Córdoba se transformó en una nueva ciudad. Calificada como la “Detroit argentina”, ofrecía “trabajo abundante, educación técnica en las plantas y algunos de los salarios más altos del país”.⁴ Su extensión creció y se modificó con la construcción de nuevos barrios típicamente obreros como Ferreyra, San Lorenzo, Deán Funes y Empalme en la zona sur, cercana a las plantas de Fiat o, Villa Libertador, Barrio Comercial y Santa Isabel adyacentes al complejo Ika-Renault.

³ En 1927 se había creado la Fabrica Militar de Aviones. Esta fábrica formó un plantel de técnicos y mano de obra competente en motores que pasaron a constituir el soporte fundamental de IAME, empresa impulsada por el brigadier San Martín, gobernador de Córdoba entre 1949-1951.

⁴ James Brennan, “El clasismo y los obreros. El contexto fabril del sindicalismo de liberación en la industria automotriz cordobesa, 1970-1975”, *Desarrollo Económico*, V.32, N°125, 1992.

El crecimiento industrial de la provincia a raíz de la radicación de fábricas automotrices extranjeras transformó la fisonomía del movimiento obrero local que se incorporó al sistema de relaciones del gran capitalismo industrial. Su concentración se produjo en los tres sectores más dinámicos de la economía provincial: automotor, metalúrgico y energía eléctrica, desplazando a los trabajadores de los sectores industriales tradicionales. Este cambio modificó la relación de fuerzas en el sindicalismo local, aumentando el poderío estratégico de los sindicatos como el Sindicato de mecánicos y afines del transporte automotor (SMATA), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y Luz y Fuerza. Pero se trató de un sindicalismo autónomo, con alta participación de las bases y mecanismos de decisión descentralizados que mantuvieron cierta autonomía e independencia con respecto a las centrales obreras nacionales. Esta independencia se debía al carácter descentralizado de los convenios colectivos en la industria automotriz argentina -concertados en un sistema de negociación de empresa por empresa-, estrategia empleada por los gobiernos militares para debilitar la presencia peronista en el movimiento obrero. Tal procedimiento tornó a los sindicatos más dependientes del apoyo de sus bases que exigía a su dirigencia estar más comprometida con los trabajadores que representaban.⁵

La acción de un sindicalismo más combativo, con el apoyo de las bases movilizadas, demostró su poder frente al gobierno, frente a los empresarios y frente a la dirigencia gremial. En efecto, el "Cordobazo" y el "Viborazo" fueron dos acontecimientos que contribuyeron a desestabilizar tanto al gobierno militar de la llamada "Revolución Argentina" como a los liderazgos sindicales, inaugurando con ello una ola de protesta y movilizaciones masivas.

Con los sucesos de mayo del '69, Córdoba se transformó en un nudo neurálgico de la agitación social. A partir de entonces, se dio inicio a un vasto movimiento de contestación y polarización ideológica que cuestionó las bases de la dominación social y todo intento de estabilizar un esquema de poder, exacerbado por la predisposición de algunos actores que pensaban que la única forma posible de producir el cambio era a través de la revolución y de la lucha armada.

En este contexto, la apertura política de 1972 se manifestó con especial intensidad en Córdoba. La salida electoral operó como una válvula de escape para encauzar institucionalmente la conflictividad social, intensificando, al mismo tiempo, la discusión política, la participación ciudadana y la movilización popular. Diferentes organizaciones políticas, con disímiles posturas ideológicas, trataron de capitalizar el estado de efervescencia social argumentando la necesidad de un cambio de estructuras. Los caminos y las estrategias para lograrlo variaban desde la liberación nacional, pasando por la revolución pacífica, la democracia liberal, hasta la revolución federal.

El levantamiento de la proscripción del peronismo le devolvió a Perón la centralidad de su liderazgo en el escenario político. Desde el exilio había logrado armar un esquema de fuerzas heterogéneas, estimulando a todos los que, desde la izquierda o desde la derecha, invocaban su liderazgo, sin temer caer en flagrantes contradicciones ideológicas. Para afirmar su voluntad organizativa, Perón logró imponer el mandato de las listas únicas para cubrir los cargos de la conducción partidaria, digitar las candidaturas y manejar las cuotas de reparto de los cargos por cada una de las ramas que integraban el Movimiento. Se apoyó tanto en los sectores negociadores del aparato político y la burocracia sindical, como en la juventud radicalizada y en las organizaciones armadas peronistas.

⁵ Véase Mónica Gordillo y James Brennan, "Protesta obrera, rebelión popular e insurrección urbana en la Argentina: el cordobazo", Revista *Estudios* N° 4, CEA-UNC, 1994.

Este difícil y imbricado andamiaje político hacia el interior del peronismo, tuvo especial repercusión en Córdoba, donde el proceso de reorganización partidaria peronista fue principalmente complicado, envuelto en duras disputas internas que terminaron, luego, proyectándose en el gobierno constitucional.

3. El gobierno de Obregón Cano y Atilio López: el combate por el poder interno

El triunfo del peronismo en 1973 consagró la fórmula del Frente Justicialista de Liberación (FREJULI),⁶ Ricardo Obregón Cano y Atilio López. El peronismo, en Córdoba, retornaba al poder de la mano de dos dirigentes de extracción y trayectorias completamente diferente.

Elegido por Perón por su incondicional lealtad, Ricardo Obregón Cano, había sido designado, en 1971, delegado del Consejo Superior Peronista para llevar adelante la tarea de reorganización partidaria en Córdoba luego de la convocatoria a elecciones del gobierno de facto presidido, en ese entonces, por Lanusse. Obregón Cano, político de reconocida trayectoria peronista en la provincia, tuvo la tarea, entonces, de organizar la Junta Promotora Provincial, la Junta Capital y las Juntas Departamentales, dando inicio a una campaña masiva de afiliaciones y a la apertura de numerosas unidades básicas.

Oriundo de Río Cuarto (1918), de profesión odontólogo, había ingresado al terreno político en 1951, cuando fue electo senador provincial por el departamento de Río Cuarto, presidiendo durante tres períodos consecutivos, el bloque de senadores. En 1954, renunció a la banca de senadores para ocupar el cargo Ministro de Gobierno, en la gestión del gobernador Raúl Lucini. Su actividad política fue interrumpida con el golpe de 1955 y la consecuente proscripción del peronismo. En 1962, al ritmo de los vaivenes institucionales del país, fue electo diputado nacional, pero no llegó a ejercer el cargo por la anulación de los comicios en todo el país. Nuevamente candidato para las elecciones de 1963, decidió renunciar para propiciar el voto en blanco, acorde al mandato del líder partidario exiliado en Madrid. Fue también delegado del Consejo Superior del Movimiento Nacional Justicialista y posteriormente presidente del Partido Justicialista de Córdoba.

Por el contrario, el recorrido político de Atilio López (1929) estuvo asociado a su actividad gremial en la ciudad de Córdoba. En la década del cincuenta fue elegido delegado de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), pero su liderazgo comenzó a crecer luego del golpe militar de la autodenominada Revolución Libertadora en 1955. Desde 1957, su nombre quedó asociado a las luchas de la resistencia peronista. Presidió el plenario de gremios cordobeses celebrados en La Falda, siendo además elegido Secretario General de la primera Confederación General del Trabajo (CGT) -regional Córdoba, normalizada. Fue artífice de la redacción de varios programas combativos del peronismo, que incluye una larga cadena de programas tales como el de Huerta Grande (1962), el de las “62 Organizaciones de pie junto a Perón” (1965), CGT de los Argentinos (1968), la declaración de los gremios peronistas combativos (1972) y la de la unidad de la Juventud Peronista, también de 1972.

La definición de la fórmula Obregón Cano – Atilio López resultaba así la amalgama de dos figuras políticas disímiles cuyo único punto de unión era la definida identidad peronista. Mientras uno representaba al peronismo más moderado y democrático, el otro, canalizaba las voces del peronismo sindical, combativo y disidente.

⁶ El Frente estaba integrado por los siguientes partidos: Partido Peronista, Partido Conservador Popular, el Movimiento de Integración y Desarrollo, el Partido Popular Cristiano, la rama del socialismo conducido por José Selser y siete partidos neoperonistas provinciales.

Pero lejos de expresar la unidad del peronismo local, el partido no pudo “amalgamar” los intereses de los distintos líderes locales. Por el contrario, la confluencia de distintas fuerzas redefinió el escenario partidario y polarizó las elecciones. A saber, es posible, identificar tres grandes vertientes en la línea del peronismo político, en la que se ubicaban dirigentes de vieja data como Julio Antún de la agrupación interna Mesa Redonda Permanente Peronista (en adelante MRPP), Raúl Bercovich Rodríguez del grupo "Unidad y Lealtad" y, Ricardo Obregón Cano. Por cierto, entre estos dirigentes existían manifiestas diferencias. Mientras los dos primeros representaban el peronismo más ortodoxo, verticalista, nacionalista de derecha, contrarios a la participación de la juventud radicalizada en el peronismo, Obregón Cano, por su parte, manifestaba una indiscutida lealtad del Líder, con una posición política más centrista que recibía el apoyo de la izquierda del peronismo.

Las agrupaciones de la izquierda peronista, por su parte, constituyeron un actor central en la reorganización del peronismo provincial. Dentro de esta vertiente, se pueden identificar a la Juventud Peronista (JP) dirigida, entre otros, por Rodolfo Vittar, la Juventud Revolucionaria Peronista (JRP) liderada por Carlos Blas García y el Peronismo en Lucha presidido por Norberto Erico Tejada. Estas agrupaciones trabajaban junto al Movimiento Revolucionario Peronista (MRP), orientada localmente por el escribano Fausto Rodríguez, y tenían vinculaciones estrechas con la organización armada de Montoneros. La mayoría de ellos propiciaban la redefinición del peronismo como agente de la revolución social.

Las “62 organizaciones peronistas” que estaban divididas en dos corrientes: la ortodoxa y la "legalista". Los ortodoxos, se definían como los auténticos peronistas y exigían una central obrera bajo el control exclusivamente peronista. Controlaba alrededor de 20 gremios, entre los cuales se contaban a la UOM, Molineros, Madera, Taxistas, y sus principales referentes eran Alejo Simó, dirigente local de la Unión Obrera Metalúrgica, y Mauricio Labat, del gremio de los taxistas. Los legalistas, por su parte, se reconocían como leales a Perón, pero, en la práctica eran más independientes y pluralistas con respecto a la representación sindical. Cuestionaban el verticalismo a ultranza de los ortodoxos, buscando ejercer una representación más inclusiva de todas las corrientes sindicales del movimiento obrero en el seno de la CGT local. Su exponente más visible fue el Secretario de la CGT regional elegido en 1971, Atilio López y controlaban alrededor de 26 gremios.⁷

En virtud del llamado a las elecciones internas (junio de 1972), todas estas vertientes realinearon sus fuerzas en alianzas para enfrentar la lucha por la conducción partidaria y la fórmula de candidatos para las elecciones provinciales. Por un lado se formó la Lista Unidad encabezada por Ricardo Obregón Cano y Atilio López, apoyados por la estructura de la Juventud Peronista y el sector legalista de las 62 organizaciones peronistas, con la adhesión de un grupo de dirigentes políticos provenientes tanto del

⁷ En el movimiento obrero de Córdoba existía, además, otros dos bloques gremiales de importancia que no provenían del campo del peronismo: los independientes, y los clasistas. El primero alineaba tras su política a algo más de 7 sindicatos liderados por el dirigente de Luz y Fuerza, Agustín Tosco. Reivindicaban un sindicalismo democrático, antiburocrático, con amplia participación de las bases. Los clasistas se encolumnaban detrás del SMATA conducido por René Salamanca, y entre sus integrantes se destacaban los trabajadores de los ex sindicatos SITRAC y SITRAM, que habían agrupado a los obreros de las empresas del grupo Fiat: Concord y Materfer. Ofrecieron una lectura clasista de la movilización, propiciando un camino revolucionario para la clase trabajadora. Los legalistas, independientes y clasistas compartían la dirección de la CGT Regional cuyas autoridades, desde marzo de 1970, eran Atilio López, secretario general, y Agustín Tosco, secretario adjunto, recientemente liberado de la cárcel de Trelew, detenido por su participación en los hechos del “cordobazo.”

peronismo provincial como de otros partidos tales como la Unión Cívica Radical Intransigente y el Movimiento de Acción Popular. Julio Antún, dirigente de la MRPP, y Alejo Simó, encabezaron la segunda lista. Absorbieron la mayor parte del peronismo tradicional y contó con el aporte del núcleo "Unidad y Lealtad" liderado por el dirigente Raúl Bercovich Rodríguez junto al sector ortodoxo de las "62".

La lista "Unidad" se impuso en los comicios internos con la fórmula Ricardo Obregón Cano-Atilio López con el 60% de los votos, derrotando a Julio Antún. Una vez concluido el proceso electoral interno se pasó a formar la alianza del Frente Justicialista de Liberación (FREJULI). En coincidencia con las afirmaciones de Gabriela Closa, Obregón Cano resultaba un dirigente con gran capacidad de convocatoria, aglutinando en torno a su figura a los distintos sectores sobre la base de las consignas de la unidad y verticalidad. Además, señala Closa, "Obregón Cano había obtenido el apoyo de los sectores más radicalizados del peronismo: la Juventud Peronista y el sindicalismo combativo de Córdoba, lo cual le otorgaba un potencial disruptivo que Perón estaba dispuesto a utilizar".⁸

Con el apoyo de los sectores más movilizados y combativos de la sociedad cordobesa, la fórmula del FREJULI se impuso en segunda vuelta con el 53% de los votos.⁹ La asunción de las nuevas autoridades, el 25 de mayo de 1973, estuvo colmada de euforia y optimismo, momento en que gran parte de los que acompañaron el triunfo tenían la clara expectativa de que el camino hacia la transformación revolucionaria se había iniciado. Una clara demostración de ello fue la liberación de veinte presos políticos beneficiados por la Ley de Amnistía firmada ese mismo día por el presidente de la nación, Héctor Cámpora. Alrededor de 1500 personas convergieron alrededor de la cárcel de Encauzados, portando carteles alusivos a la liberación. Luego, fueron recibidos en la casa de gobierno por Ricardo Obregón Cano e izaron en el mástil principal las banderas del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), Fuerzas Armadas Peronistas (FAP) y Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

Cuatro días después, en ocasión del IV aniversario del "cordobazo", miles de personas se concentraron en Bv. San Juan y Arturo M. Bas, para recordar los sucesos de la jornada del mayo de 1969, símbolo de lucha y movilización popular. Junto a los oradores principales -Atilio López, Ricardo Obregón Cano, Agustín Tosco, René Salamanca y representantes de todas las organizaciones armadas, Montoneros, FAR, FAP y ERP-, compartió la tribuna el Presidente de Cuba, Osvaldo Dorticós. Los manifestantes aplaudieron sus palabras cuando dijo que en Cuba se tenía conocimiento del vigor revolucionario de esta ciudad, que traía un fraternal abrazo del líder revolucionario Fidel Castro y que estar en Córdoba era recordar a ese paradigma de la revolución latinoamericana que fue el "Ché" Guevara.: "Nos unen las ansias, los sueños y los ideales comunes y algunos hechos y personajes, tales como José Martí, y aquel héroe argentino Ernesto Guevara, nuestro tan querido "che". Con la presencia de todo y de todos juremos aquí, argentinos y cubanos, en contra del imperialismo y todo lo que él representa como enemigo común. Cuba y su pueblo están con ustedes, patria o muerte, venceremos"

⁸ Gabriela Closa: "Las prácticas del peronismo de Córdoba, 1971-1973 y las tensiones en su identidad política" en Mónica Gordillo (edit.): *Actores, prácticas, discursos en la Córdoba combativa*, Córdoba, Ferreyra Editor, 2001.

⁹ En las elecciones del 11 de marzo el FREJULI obtuvo el 42,9% y el radicalismo el 41,8%. Debido a que ninguno de los partidos obtuvo la mayoría simple, el 50% más uno, la provincia tuvo que definir los candidatos a gobernador y vice en una segunda vuelta electoral. El 15 de abril se realizó el ballottage y confirmó el predominio del peronismo que ya se había dado a nivel nacional: el FREJULI alcanzó el 53% de los votos y la UCR alcanzó el 45,5%.

Ciertamente, las palabras de Dorticós ensalzaban la mítica identificación entre el pueblo cubano y el argentino, unidos por el ideal de la revolución y la lucha contra el imperialismo. Liberación y patria socialista fueron los dos términos utilizados con recurrencia entre los oradores para definir el objetivo a conseguir. El pueblo, ese sujeto tan inasible como etéreo, era convertido en el artífice de toda la práctica política del momento.

La gran ausente de los discursos fue la democracia. El proceso institucional que se iniciaba lo hacía con términos muy disímiles, con variedad de significados y con escaso valor en sí mismo. Mientras para algunos era el retorno a la institucionalidad, para muchos otros era el inicio de la revolución socialista.

Obregón Cano se movió entre estos dos sentidos, y construyó una imagen de político preciso, destinatario de un poder que se le había conferido y que, por ende, con el deber y la responsabilidad de gobernar para todos. Desde esta lógica se puede explicar su posición luego de las internas partidarias cuando afirmó que era necesario terminar con las listas y los enfrentamientos: “concluida la elección interna no existen más las listas y los dirigentes enfrentados, sino el pueblo peronista, la jefatura de Perón y la lucha a que nos convoca la Patria oprimida.”¹⁰

Igualmente, en la etapa de la campaña electoral, el discurso del candidato peronista, apelaba al tono persuasivo de las palabras destinado a reforzar en sus destinatarios más directos la confianza en el futuro programa del gobierno: “Hoy existen coincidencias en las mayorías sobre un programa que tiene un fin inequívoco: la preparación del camino argentino hacia el socialismo.”¹¹

Esta situación dual entre terminar con las internas intraperonista y construir el camino hacia el socialismo, tenía como único vértice de unidad y autoridad, la figura del líder, Perón. Obregón Cano reforzó su propia voz tomando la palabra de Perón. Desde ese lugar, el gobernador convocó a todo el pueblo "sin distinción de ideas políticas" para que otorgasen “a los intereses colectivos y a los intereses nacionales un carácter prioritario” y, aseguró que no toleraría “la restauración de viejas antinomias.” La convocatoria estuvo dirigida a hombres y mujeres del movimiento en primer lugar, luego a todas las fuerzas políticas y, en particular al radicalismo, a quien llamó para actuar como “control y fiscalización.”¹² Colocó al principal partido opositor en el lugar del adversario legítimo y ubicó a los “grupos perturbadores” o “minoritarios” en el espacio de la ilegalidad, por fuera del “nosotros” (suma del pueblo y su gobierno): “no hacer el juego a grupos perturbadores de izquierda o derecha que están en contra del pueblo que votó el 11 de marzo.”¹³

El perfil del enemigo, en el discurso de Obregón Cano, como bien afirma Santiago Esteso, fue definido por sus prácticas: era el que presionaba, amenazaba, chantajeaba ideológicamente, frenaba el proceso revolucionario, obstruía la obra de gobierno, desacreditaba a los gobernantes, defendía los intereses exclusivos de su grupo, consolidaba la dependencia: “no se puede dejar de señalar que grupos minoritarios, interesados en frenar el proceso revolucionario y obstruir la obra de gobierno han desatado una campaña de descrédito y de presiones inadmisibles.”¹⁴

Ciertamente, estas expresiones eran una respuesta a los enfrentamientos desatados hacia el interior del peronismo y del movimiento obreros cordobés. El gobierno de Obregón

¹⁰ Revista *Jerónimo*, Córdoba, año I, N°12, 1972.

¹¹ Ídem

¹² Diario de Sesiones de la HCS, Córdoba, Año 1973, Tomo I, p. 24 y ss.

¹³ Diario *Córdoba*, 15-6-73.

¹⁴ Adriana Boria y otros, 1973. *Córdoba. Tiempos violentos. El discurso social*, Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, 1997, p.108.

Cano fluctuó entre las demandas de una mayor radicalización de las políticas estatales por parte de la izquierda peronista y, la presión de la derecha política-sindical para ocupar los espacios de poder. Frente a esta paradoja, el gobernador ocupó la posición del político mediano que ejercía el poder desde el “saber hacer”:

“Quien o quienes, invocando intereses de facciones ejerzan presiones de cualquier tipo (...), encontrarán la misma respuesta: no cederemos ante las presiones, ante las amenazas y, mucho menos aún, ante el chantaje ideológico (...). Esta gran empresa de reconstrucción se cumplirá en el marco del más absoluto respeto por los derechos de todos los ciudadanos y bajo el imperio de la constitución y la ley (...).”¹⁵

Este mensaje advertía al enemigo prescribiendo la necesidad de un deber ser, este es, permanecer bajo el orden de la ley, un supuesto más vinculado al respeto de las instituciones liberales que al objetivo de transitar la revolución socialista.

No obstante, las dificultades que tuvo que afrontar el gobierno de Obregón Cano se desplegaron en más de una escena. Los conflictos centrales viraron en torno a la puja entre los distintos actores que actuaron con beligerancia política, demostrando capacidad de veto ante las medidas e iniciativas emprendidas por el Poder Ejecutivo, poniendo en jaque el ejercicio de la autoridad estatal investida en la figura del primer mandatario. Mientras para Obregón Cano la función del Estado consistía en responder a la ciudadanía con soluciones concretas, que beneficiaran al campo popular, por el otro lado se fue formando un arco opositor que involucró a importantes actores sociales y políticos de Córdoba. La jerarquía eclesiástica se movilizó contra la iniciativa de homologar el estatuto del personal docente de enseñanza pública y privada; los ganaderos protestaron contra la regulación de precios en la comercialización de la carne, los obreros del transporte urbano reclamaron aumento salarial desatando un conflicto entre la UTA y la Fetap y, entre el vicegobernador y las autoridades municipales y, la policía impugnó la reorganización los cuadros policiales y la reincorporación de los cesanteados en 1955, con el agravante de eliminar la bonificación del 30% por riesgo de trabajo. Las medidas e iniciativas emprendidas fueron impugnadas por cada uno de los actores y sectores afectados y, cada nudo conflictivo evidenció la falta de efectividad del gobierno de Obregón Cano para resolver problemas que afectaban a amplios sectores de la población.

Sin embargo, no fueron las tensiones generadas por estos actores lo que desestabilizaron al gobierno, restándole eficacia a su política de gobierno. Por el contrario, fue el conflicto sindical y la interna partidaria los que pusieron en crisis la estabilidad de las autoridades provinciales.

En rigor, desde el mes de julio, dos hechos complicaron el panorama político del gobernador de Córdoba. El 1° de julio de 1973, el secretario general de la CGT, José I. Rucci, anunció la revocación de los consejos directivos de todas las regionales y la realización de nuevas elecciones. La CGT central se preparaba para reafirmar su control sobre el movimiento obrero y se propusieron como uno de sus principales objetivos recuperar el control del sindicalismo cordobés. El segundo hecho fue la forzada renuncia del presidente Héctor Cámpora, el 13 de julio, provocada por la presión que ejercieron los sectores de la derecha, invocando la necesidad de realizar de inmediato nuevas elecciones, sin ningún tipo de proscripciones.

¹⁵ Diario *Córdoba*, 3 y 14-7-73

Ambos acontecimientos fueron marcos habilitadores para el avance de la derecha peronista, política y sindical, sobre el gobierno provincial y sobre el movimiento obrero local. Desde entonces, el gobierno de la provincia de Córdoba, al igual que los de Mendoza, Salta y Santa Cruz, comenzó a ser impugnado en su legitimidad de ejercicio en tanto se lo acusaba de permitir la “infiltración marxista” en los equipos gubernamentales. Los “infiltrados”, los “marxistas”, los “terroristas” se convirtieron en los enemigos, figurativizados como aquél que ataca al movimiento peronista y, de esta manera, a la nación en su conjunto.¹⁶ A modo ilustrativo, podemos citar las expresiones del dirigente municipal, J.C.Gamarra, cuando decía que Tosco era uno de los principales responsables de los asaltos a las organizaciones gremiales y que contaba con la complaciente actitud del vicegobernador de la provincia, Atilio López: “Se está permitiendo que el marxismo cope los sindicatos desde la misma Casa de Gobierno.”¹⁷ Paralelamente se fue instalando el tema de la posible la intervención federal. Esta posibilidad, prevista en la constitución nacional, operaba como estrategia de presión para el gobierno de Obregón Cano a quien le exigían “desprenderse” de los colaboradores “infiltrados” y que rectificara el rumbo del gobierno para encauzarlo según los lineamientos del gobierno nacional. Obregón Cano, respondía, a su vez, que en su gobierno no existía “infiltración roja” y que la “reconstrucción nacional” se haría en el marco de la ley y la constitución, afirmando, y volviendo a reafirmar, su autoridad, investida de legalidad e imparcialidad: “este gobierno estará presente en toda acción que asegure la unidad de los sectores populares y será inflexible con cualquier intento divisionista (...). El gobierno respetará los derechos de todos y se hará respetar.”¹⁸ En la misma sintonía, se ubicaban las declaraciones de Atilio López, al reiterar públicamente que el mandato del pueblo iba a ser cumplido.

A partir del mes de octubre cuando Perón asumió la presidencia, la posición del gobernador se debilitó aún más. La estrategia del Presidente fue frenar la movilización popular e institucionalizar al movimiento. Primero aparecieron las advertencias, luego, las descalificaciones y, finalmente, el efectivo proceso de exclusión. Siguiendo a Santiago Esteso, se puede advertir, en el discurso de Perón, tres posiciones hacia el interior de un campo de fuerzas y de choques. En primer lugar, definió el peronismo, esto es, los “nuestros” como “somos lo que las veinte verdades peronistas dicen”, “no hay nuevos rótulos que califiquen a nuestra doctrina ni a nuestra ideología”. Desde este lugar, para Perón, el peronismo era atacado por elementos extraños y ajenos al Movimiento. En segundo lugar, definió a la izquierda como los que “no lo son”, los que estaban por fuera del sistema, perturbadores del orden social, los que atacaban al justicialismo y al pueblo. Por último, delimitó al pueblo argentino, que no era marxista, y que por lo tanto resultaba víctima de los ataques de la izquierda: “A los enemigos embozados, encubiertos o disimulados, les aconsejo que cesen en sus intentos, porque cuando los pueblos agotan sus paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento”.¹⁹ De esta manera, en palabras de Esteso, “en la reagrupación de los partidarios se cruzaba en un mismo lado el “peronismo” y el “pueblo argentino” enfrentando a un solo enemigo: el marxismo, la izquierda.”²⁰

La reestructuración partidaria, la reorganización de los cuadros de gobierno y la alianza con los sectores ortodoxos del movimiento obrero fueron los marcos de acción del

¹⁶ Adriana Boria, *Op. Cit.*, p. 117

¹⁷ *Diario Córdoba*, 11-6-73.

¹⁸ Adriana Boria, *Op. Cit.*, p. 111

¹⁹ Juan D. Perón, *Discursos y mensajes*, junio – octubre de 1973. Presidencia de la Nación, Secretaría de Prensa y Difusión.

²⁰ Adriana Boria, *Op. Cit.*, pp.120-121

gobierno central cuyo objetivo expreso era dismantelar y depurar aquellos espacios ocupados por los sectores radicalizados aplicando la más rígida disciplina en su interior. Estas medidas habilitaron la ofensiva de la oposición de la derecha política y sindical se lanzaron a recuperar el tiempo y el terreno perdido.

En esta línea de acción, el 1° de octubre de 1973 se dio a conocer la orden reservada del Consejo Superior del Movimiento Nacional Justicialista (CSMNJ) en la cual se especificó que el Movimiento estaba pasando por verdadero estado de guerra. El documento hacía explícita las estrategias que empleaba el enemigo en esta guerra: llevando adelante una campaña de desprestigio contra los dirigentes peronistas acusándolos de “traidores” a la doctrina y de Perón; la infiltración de los marxistas con el objetivo de desvirtuar la doctrina y, por último, las agresiones, amenazas, y asesinatos de dirigentes que sólo creaban un estado de miedo. Para afrontar esta lucha, se debía instrumentar todos los medios que se considerasen eficaces, entre ellos, reafirmar la doctrina justicialista e iniciar el proceso de depuración ideológica. En consonancia con este ideario, las autoridades del Consejo difundieron un comunicado en el que dejaron claramente expreso que resultaba “imprescindible establecer definitivamente quienes integran lealmente nuestras filas, abrazan desinteresadamente la doctrina justicialista y cumplen fielmente las directivas de nuestro jefe (...).” Disciplina, unidad y verticalidad eran las directivas impartidas por Perón hacia el movimiento y hacia los gobernantes. Se los conminaba a transitar en la más pura ortodoxia peronista.

A fines de diciembre de 1973, comenzó a prepararse la “limpieza” de Córdoba, que se desplegó, al menos, en dos niveles políticos. Por un lado, el CSMNJ designó a Luis Longhi, abogado de la UOM, como delegado interventor al Partido Justicialista de Córdoba en reemplazo del dirigente local Leonardo Obeid. En oportunidad de su asunción declaró que no iba a admitir “ningún tipo de desviación ni infiltración en el peronismo”²¹. Señaló que la depuración ideológica y su aplicación en Córdoba iban a consistir en que “cada peronista defienda consciente, auténtica y valientemente todos los postulados enunciados por Perón.”²² La orientación que Longhi imprimiría a su gestión quedó evidenciada con la definición de sus principales interlocutores: Julio Antún y la dirección en pleno de la MRPP, principales opositores al gobierno de Obregón Cano.

El segundo nivel de acción política estuvo centrado en la disputa en torno a la conformación del futuro secretariado de la central obrera. Mientras los ortodoxos proponían que debía estar integrado solamente por peronistas, los legalistas consideraban que el secretariado debería surgir democráticamente del plenario de gremios y acatar lo que las bases expresaran a través de sus sindicatos. Las diferencias políticas terminaron en diciembre en una nueva ruptura de las “62 organizaciones” cordobesas. El 9 de febrero, se reunió el plenario de las “62 organizaciones” peronistas de Córdoba, lideradas por el sector ortodoxo y, resolvió, por unanimidad, la moción de que el futuro secretariado de la CGT fuese íntegramente peronista y verticalista.

Pero, también, miembros del equipo de gobierno de Obregón Cano comenzaron a cuestionar las políticas gubernamentales. El secretario general de la gobernación, Jorge Dall’Aglío planteó al ministro de gobierno, Erio Bonetto, la necesidad de llevar adelante una acción conjunta para revertir la orientación del gobierno peronista. El otrora colaborador del gobernador durante la campaña electoral, el diputado nacional, Carlos Palacios Deheza, declaró que “tanto en el orden provincial como nacional, el peronismo

²¹ Diario *Córdoba*, 16-12-73.

²² Archivo Fílmico de Canal 10, Departamento de Cine y TV, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba.

de Córdoba está tan marginado como durante la dictadura.”²³ Estas expresiones eran interpretadas por la prensa de la época como un definitivo alejamiento de ambos dirigentes. Similares actitudes asumieron el senador nacional, Luis Carnevale, y el senador provincial, Erico Tejeda, quienes constituyeron un frente común con el ex gobernador Auchter, el ex intendente Obeid, la diputada nacional Arminda Zuleta de Arraya, debido a sus permanentes desencuentros con la conducción política-gubernativa.²⁴

No menos insidiosas fueron las críticas de la izquierda peronista, principal motor de fuerza y movilización del gobierno de Obregón Cano. Por cierto, hacia fines de 1973, dio claras señales de distanciamiento con respecto a las políticas del gobierno. Así, la revista *Militancia Peronista para la Liberación*, dirigida por Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Duhalde, manifestó que causaba malestar, en la expectativa popular, “la vacilación y la parálisis” de las autoridades provinciales. Señalaban que la palabra intervención se había instalado tempranamente, desde el primer día de gobierno y que, ese fantasma, –más intenso en el momento en que dieron el golpe contra Cámpora- en lugar de actuar como acicate para un gobierno con tal aval popular desarrollar una política agresiva, obró como un dique frenador y paralizante.²⁵

Jaqueado por los problemas internos, con la oposición intrapartidaria in crescendo, cuestionado por el gobierno nacional y con escaso margen de iniciativa/autonomía política, el gobierno de Obregón Cano fue derrotado finalmente con el golpe policial del febrero de 1974, conducido por el jefe de policía, Antonio Navarro.

Alegando que había recibido la denuncia de que estaban repartiendo armas a civiles en la Casa de Gobierno, Navarro ocupó la misma, deteniendo a los primeros mandatarios y a unos cuantos funcionarios de gobierno de alto rango. Simultáneamente comenzó la represión y persecución a dirigentes peronistas, a gremialistas y activistas estudiantiles.

Ante la ausencia del presidente de la Cámara de Senadores, Norberto Erico Tejeda, le correspondió a Mario Dante Agodino, presidente de la Cámara de Diputados, asumir como gobernador de la Provincia, con el apoyo del bloque de legisladores del FREJULI y la UCR. Al día siguiente, firmó el decreto convocando a elecciones para "completar el proceso tendiente a la normalización institucional" y dio por terminadas las funciones de los Ministros de Gobierno, de Economía y Hacienda y el de Bienestar Social, reemplazados por Alejandro Mosquera, Oscar Eduardo Valdéz y Raúl Bercovich Rodríguez en las carteras ministeriales respectivas. Todos del espectro opositor a Obregón Cano. También, el primer día de marzo, el Juez Federal Zamboni Ledesma decretó la libertad de los detenidos. Liberados, dieron a conocer un comunicado en el que procedían a reasumir el Poder Ejecutivo con sede provisoria y desconocida. La provincia tenía dos gobernadores.

Paralelamente al golpe policial que destituyó a las autoridades provinciales, en la cercana ciudad de Alta Gracia, se estaba llevando adelante otra purga de carácter gremial. Con la presencia del secretario adjunto de la CGT nacional, Raúl Ravitti, y del ministro de Trabajo, Ricardo Otero y con la explícita exclusión de los sindicatos legalistas, independientes y clasistas, se llevó a cabo el congreso normalizador de la CGT. Por unanimidad se resolvió acabar con "el juego de una CGT escandalosa o inexistente" para adherir a los lineamientos de la política nacional y normalizar la central obrera, regional Córdoba, para conducirla con la "ortodoxia más pura y más revolucionaria de la doctrina justicialista."

²³ Diario *La Nación*, Buenos Aires, 7-1-74.

²⁴ Diario Córdoba, 11-12-73 y Diario *La Nación*, Buenos Aires, 27-1-74.

²⁵ Revista *Militancia Peronista para la Liberación*, Año I, Nº 15, 20-9-73.

La primera respuesta del gobierno nacional fue tan imprecisa como desconcertante: “hay que dejar que Córdoba se cocine en su propia salsa”, haciendo alusión con ello a que Córdoba debía resolver los problemas por sí misma. Esta respuesta distaba de la declaración realizada unos días antes frente a los integrantes de la Mesa Directiva de las “62 organizaciones” nacionales y del Secretariado General de la CGT, cuando calificó a Córdoba como un “foco de infección”, acusando a los infiltrados de “brotes enfermos” que venían a perturbar el cuerpo sano del verdadero justicialismo. En esa oportunidad especificó que para desplazar a los infiltrados de los gobiernos provinciales había que “hacerlo con buena letra” y que mejor que resolver los problemas en las propias provincias, era conveniente resolverlos en la órbita del gobierno central a través del ministerio del interior.²⁶

Acorde con esta posición, al día siguiente de los sucesos “navarrazo”, el presidente envió al parlamento nacional el proyecto de intervención federal a la provincia. El mensaje que acompañó al proyecto, argumentaba que las autoridades elegidas “no supieron colocarse a la altura de los deberes de su función”, y “sin percatarse se fueron alejando de la revolución auténtica.” Para el ejecutivo nacional, el gobierno de la provincia había tolerado y, a veces, hasta fomentado “diversas situaciones conflictivas que fueron provocando un creciente clima de intranquilidad pública.”²⁷

De esta forma, la impugnación no recayó sobre el responsable del golpe policial, sino sobre las autoridades legítimamente constituidas. Así, tempranamente, se asistió en Córdoba, al derrumbe de sus instituciones democráticas y, el gobierno nacional, a través del proyecto de intervención, terminó legitimando el golpe policial. Irónicamente, un mes después, Perón declaraba: “Cada provincia ha de resolver sus problemas y, si se entierra, no ha de ser porque nosotros presionemos o la hundamos.”²⁸

No menos sugestivas fueron las palabras de despedida del ex gobernador Ricardo Obregón Cano: “el pueblo juzgará quien estuvo a la altura de sus responsabilidades y quien estuvo en la inconducta y la traición.”²⁹

A tres décadas de la caída del gobierno de Obregón Cano y Atilio López, la pregunta que sigue rondando en las investigaciones históricas es ¿por qué el General dejó que se produjera el episodio? En el universo polisémico de los discursos de Perón, se dejaba entrever las contradicciones y ambigüedades del anciano caudillo, pero resulta evidente que nada escapaba a su autoridad y que estaba dispuesto a recurrir a todos los métodos necesarios para imponer su orden político. En rigor, hacía tiempo que Perón había dado la luz verde para llevar adelante la “limpieza ideológica” de los equipos de gobierno, sobre todo de aquellas provincias cuyos gobernantes habían recibido el apoyo de la izquierda peronista. Para Perón, la “limpieza” se confundía con el objetivo de resguardar la paz social, lo que implicaba, por un lado, recuperar para el peronismo un partido sano, ordenado, auténtico y, por otro lado, asegurar para el pueblo argentino, tranquilidad y seguridad.

4. Los gobiernos de la intervención federal: hacia el disciplinamiento interno.

El primer interventor federal designado por Perón en la provincia de Córdoba fue una persona de incondicional lealtad a su autoridad. Se trató de Duilio Brunello. De origen catamarqueño, ocupaba la Secretaría de Promoción y Acción Social dependiente del Ministerio de Bienestar Social, cuya titularidad ejercía José López Rega. Con su

²⁶ Diario *La Voz del Interior*, 21-2-74.

²⁷ Diario de Sesiones de la HCS de la Nación, Año 1974, T.IV, p.3618 y ss.

²⁸ Diario *La opinión*, Buenos Aires, 5-4-74

²⁹ Diario *La Voz del Interior*, Córdoba, 6-4-74

designación, el Presidente estaba concretando la anunciada reestructuración de los equipos de gobierno. Sobre la base de estas definiciones, el interventor reclutó el personal para su gabinete en las fuentes del peronismo ortodoxo, como estrategia para desprenderse de los protagonistas del "navarrazo" y presentar una imagen más aceptable políticamente ante sus adversarios y ante la sociedad. Viejos dirigentes de la rama histórica, excluidos durante el gobierno de Obregón Cano, ocuparon las principales áreas de gobierno: José Mosquera, ministro de gobierno; Raúl Bercovich Rodríguez en el ministerio de bienestar social; Armando Casas Nóbrega, subsecretario general de la gobernación; Enrique Kademian de la Mesa Redonda Permanente Peronista, subsecretario de obras y servicios públicos, entre otros.

La funcionalidad de Brunello consistía, en primer lugar, disciplinar políticamente al propio y frenar el estado de movilización de la sociedad cordobesa. Para las nuevas autoridades, resultaba fundamental resolver la cuestión de la legitimidad, es decir, reequilibrar los mecanismos básicos de la democracia sin erosionar el consenso inicial del régimen abierto en marzo del 73. Para ello era indispensable ampliar la base de apoyo proponiendo "gobernar para todos los sectores sociales, sin sectarismos."

El testimonio de Brunello destaca que su misión no fue ver cómo estaba Córdoba, o qué tenía que hacer en Córdoba, sino cumplir otros objetivos que verbalmente se los había dado el Gral. Perón, que eran, básicamente, tres:

"Primero, reestablezca el principio de autoridad; segundo, pacifique a la provincia; y tercero, ponga en funcionamiento un plan de gobierno, que, con la brevedad del tiempo transcurrido entre el nombramiento, la elección de Obregón Cano y los hechos que lo abatieron, no había habido tiempo de formularse un plan de gobierno"³⁰

Para el ex Interventor, la pacificación requirió, como primera medida, recuperar todas las armas que se habían distribuido a los civiles en momentos del "navarrazo"; segundo, sumar como equipo de colaboradores a peronistas cordobeses; tercero, no intervenir las municipalidades cuyas intendencias eran ejercidas por el partido opositor; por último, mantener relaciones dialoguistas con el espectro opositor.³¹

La correlación de fuerzas políticas, luego de instalada la intervención federal, resultaba un cuadro político confuso e inédito. Frente a un Poder Ejecutivo intervenido, las cámaras legislativas conservaron sus atribuciones constitucionales. Sin embargo, Brunello, tuvo menos dificultades con el espectro opositor que con su propio partido. A pocos días de su asunción, el Interventor pidió a los radicales y demás partidos que dejaran a un costado toda prevención: "Sería imperdonable que perdamos esta ocasión histórica de poner Córdoba en pie."³²

En efecto, para el radicalismo, la ilegalidad del "navarrazo" debía resolverse con la gestación de un proceso -el gobierno de la intervención- de normalización y pacificación. La disposición a apoyar las nuevas autoridades incluía, al menos, dos objetivos: por un lado, no "resentir" la independencia de los poderes y, por otro, no reproducir la política del gobierno anterior de confundir gobierno con partido. Así lo expresaba el comité provincial, presidido por el senador Eduardo Angeloz, y los bloques provinciales de senadores y diputados de la Unión Cívica Radical (UCR): "Que ni

³⁰ Entrevista a Duilio Brunello. Buenos Aires, 16-10-2008. Entrevistadora, Melisa Paiaro. Agradezco su gentileza.

³¹ *Ibidem*

³² Diario *La Voz del Interior*, Córdoba, 28-6-74.

el Sr. Interventor Federal, ni sus colaboradores distraigan ni un minuto de su tiempo para prestarse a ese juego partidista que ha lesionado tan gravemente a nuestra Córdoba, y que se demuestre -si aún es posible hacerlo- que el partido en el gobierno cuenta realmente con hombres y aptitud para responder con eficacia y lealtad al mandato del pueblo”.

De esta forma, la UCR se autoasignaba la función de garantía de la institucionalidad. Optó por asumir la misión de “vigilar”, “estar atenta” o “alerta”, para que no se produjeran “nuevas desviaciones”, tal como había sucedido con el gobierno de Obregón Cano.³³

Pero fueron, fundamentalmente, las tensiones y enfrentamientos del propio campo peronista las que volvieron a estallar en el interior del gobierno provincial. La crisis desatada en el bloque de legisladores del FREJULI, y el cuestionamiento realizado por la CGT fueron factores que contribuyeron a minar el proceso de reequilibramiento que pretendió significar la gestión de Brunello.

En efecto, en ocasión de elegir el presidente provisional de la Cámara de Diputados, el bloque de diputados del FREJULI se dividió en dos. Los diputados peronistas, Oscar Valdéz, quien encabezó la disidencia, Mario Aguilera, Miguel Marcattini, Julio Soria, Delia Feresini de Lacase y Mario Agodino, identificados con la línea ortodoxa del peronismo, se separaron del bloque mayoritario, restando quórum a la candidatura del diputado Lino Verde Torres para ocupar la presidencia de la Cámara. Este legislador había sido propuesto por Héctor Bruno, presidente del bloque del FREJULI, argumentando que Lino Verde Torres era un representante genuino de la clase trabajadora, “símbolo del proceso revolucionario que necesariamente tiene que transitar nuestra patria.”³⁴ El 21 de abril de 1974, la Cámara baja sesionó con diez diputados del FREJULI y catorce de la UCR, faltando los seis disidentes. En consecuencia, la votación resultó favorable al bloque radical, siendo elegido los diputados Ramón Zavala como presidente, Atilio Oldrino como vicepresidente 1º y Ernesto Aracena como vicepresidente 2º. El ex diputado provincial, Carlos Béjar, recuerda aquella situación paradójica en estos términos:

“El bloque peronista en el año 1974, a raíz de este asunto del navarrazo se divide, en ese momento, yo estaba al cargo de la presidencia del bloque radical, y, los dos grupos en que se dividen vienen a nosotros, a pedir el apoyo para uno de sus hombres, para la presidencia de la cámara, aduciendo que ellos eran mayoría, a lo que yo les digo, ustedes son mayoría pero juntos, no divididos, y nosotros, reconocemos que la presidencia de la cámara les corresponde a ustedes, pero juntos, no vamos a tomar partido en la interna peronista (...). Lo razonable es que nosotros vamos a proponer un candidato nuestro hasta que ustedes arreglen sus problemas internos.”³⁵

La lectura de esta ruptura y la consiguiente elección de autoridades radicales, debe realizarse desde varios puntos de vista. En primer lugar, la escisión debe ubicarse como parte de la ofensiva hacia los sectores obregonistas, eliminando la candidatura del diputado Verde Torres. En segundo lugar, para los sectores ortodoxos era preferible una presidencia radical, que un diputado identificado con la Tendencia.

³³ Diario *La Voz del Interior*, Córdoba, 16-3-74

³⁴ Diario *Córdoba*, 21-4-74.

³⁵ Entrevista a Carlos Béjar. Córdoba, 17/9/99. Entrevistadoras: Alicia Servetto y Marta Philp

El cuestionamiento a la división del bloque frejulistas no dejaba de preocupar al Interventor quien realizó reiterados pedidos para que se reconstruyera el Frente Justicialista, que abandonasen sectores y tendencias, "para que sin mirar el pasado, que está ya sepultado por los hechos, nos pongamos a trabajar juntos"³⁶.

No obstante los intentos de Brunello, la dinámica de la política provincial superaba los llamados a la unidad y los mismos mecanismos institucionales como espacios para dirimir conflictos. Estos se multiplicaban y se procesaban en otras esferas fuera de las instituciones formales pero no por ello menos decisivas. En efecto, a la división del bloque de diputados del Frejuli, se sumó la ruptura con la dirección de la CGT regional. Si bien, el nuevo Secretario General de la central fue uno de los primeros en saludar a Brunello en nombre de toda la clase trabajadora, como evidente manifestación de apoyo al gobierno de la intervención, a los pocos meses, decidió retirar su apoyo al gobierno de la intervención por que no se estaban cumpliendo los compromisos asumidos con el pueblo. Evidentemente, la política moderada de Brunello había desilusionado las expectativas de la dirigencia sindical en cuanto habían confiado en encontrar un aliado incondicional para desplazar definitivamente a los sectores disidentes. Pero, fundamentalmente esperaban obtener una mayor influencia en los centros de decisión gubernamental.

Después de la muerte del presidente Perón y la consecuente continuidad del mandato por parte de la vicepresidente de la nación, su esposa, Isabel Martínez de Perón, Brunello perdió sus principales apoyos nacionales. Isabel se propuso homogeneizar el gobierno desde la ortodoxia más pura, colocando a amigos e incondicionales en los puestos claves y rompiendo cada una de las alianzas que había entablado el ex Presidente. Hacia el interior de la provincia, el Interventor, carecía de soportes sólidos: el bloque de legisladores se hallaba dividido; el partido, sin peso ni gravitación política, se disgrega en sus pujas internas; y por último, una dirigencia sindical en abierto conflicto con el gobierno que había decidido regresar a la vieja tradición vandorista, de presionar para luego negociar.

A fines de agosto de 1974, el gobierno nacional aceptó la renuncia del interventor federal, Duilio Brunello. En su lugar fue designando el "ultraverticalista" brigadier mayor (re), Raúl Oscar Lacabanne, quien provenía de las filas más reaccionarias del "clan" López Rega³⁷.

4.1. Lacabanne y su lucha contra la Córdoba marxista

La imagen de quienes estuvieron en la ceremonia de asunción proyectaba las nuevas relaciones de fuerza y el rumbo de la Intervención Federal. Se encontraban presentes el Comandante del III Cuerpo, Gral. Della Croce, el Jefe de Policía, Gral. Landa, el Secretario de la CGT regional, B. Barcena y directivos de las "62".

Una componenda de actores cuya confluencia en el acto no resultaba ni casual ni sutil. Lacabanne asumió la intervención federal de la provincia con el aval que le otorgaron las máximas autoridades nacionales, fundamentalmente el Ministro de Bienestar Social, José López Rega, el apoyo de la dirigencia cegetista local y con el soporte de las

³⁶ Diario de Sesiones de la HCS, Córdoba, Año 1974, T.I, P.304.

³⁷ En rigor, sus relaciones con el peronismo eran de larga data. En 1955 el brigadier Lacabanne se desempeñaba como Director de la Escuela de Aviación Militar con asiento en Córdoba. Durante la revolución de septiembre, fue el único militar de esa unidad que resistió al asalto de los comandos antiperonistas, razón por la cual fue pasado a retiro. Cédar Tcach, *Sabatinismo y peronismo*, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1991, p.266-275.

fuerzas de seguridad, tanto del comando del III Cuerpo de Ejército como de la policía de la provincia. Sobre estos tres pilares, la intervención sustentó su poder.

Los supuestos fundamentales de su gestión de gobierno fueron explicitados durante el acto de asunción. Se definió como soldado de Isabel y declaró estar en guerra. Los enemigos eran todos aquellos que estaban en la antipatria, y lo eran, simultáneamente, tanto del pueblo argentino como del Estado Nacional, ambos en una relación simbiótica con el pueblo peronista. Los enemigos eran la antipatria: "Toda persona que se ponga al margen de las leyes será sancionado con todo rigor."³⁸ Para Lacabanne, la subversión adoptaba muchas formas, y cuando se las eliminaba en algún campo, tomaban inmediatamente otra forma, en otro lugar.

De acuerdo a su diagnóstico, la realidad cordobesa exigía imponer orden para actuar en libertad y, el orden sólo era posible de alcanzar con poder y autoridad. Terminar con la subversión y sentar las bases del "orden imprescindible" era la condición fundamental para encarar la etapa de la organización y llevar adelante el proyecto de Perón. Esta "organización" era pensada desde la idea de la "comunidad organizada", un concepto que procuraba ordenar la sociedad desde el Estado, en el cual las corporaciones, fueran las voces intermedias entre el Estado y la Sociedad. Ello implicaba excluir como canales de intermediación a todas aquellas fuerzas centrífugas, de carácter ideológicas y clasistas. Esta premisa significaba que no cualquier asociación de interés sería reconocida por el Estado, sino solamente las que estuvieran "limpias" de subversivos. También significaba prescindir de las instituciones del sistema democrático, tales como partidos políticos y parlamento, ámbitos de expresión del pluralismo ideológico.

Sus primeras medidas estuvieron en consonancia con el ideario de un militar en acción. Para terminar con la imagen de una "Córdoba marxista" y con el apoyo del Comando Libertadores de América, versión autóctona de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA), llevó adelante una política de represión y persecución a los principales dirigentes del peronismo revolucionario, como así también a los líderes de los sindicatos combativos y disidentes. La purga del movimiento obrero también implicó acciones como la incorporación de la UTA a las "62 organizaciones" peronistas, la intervención a los Sindicatos de Luz y Fuerza y el SMATA y la orden de captura para Tosco y Salamanca. Prohibió todas las asambleas gremiales, permitió el saqueo de archivos y fiscalizó la virtual suspensión de todas las actividades sindicales, incluyendo las de bienestar social.

La depuración "ideológica" también se extendió a la administración pública. Por decreto, ordenó su reestructuración mediante la cual se dieron de baja a un centenar de empleados que a criterio de los informes de ministros y secretarios no reunían las "condiciones morales y aptitudes para el servicio."³⁹

Además contó con el apoyo del nuevo interventor partidario, Armando Casas Nóbrega, quien fijó como línea de acción política la "verticalidad" y se propuso retomar el camino del peronismo histórico, cristiano y humanista como bandera partidaria. Dejó sin efecto el funcionamiento de las Unidades Básicas y las Juntas Departamentales, exigiendo, por mandato del Consejo Superior, que todos los legisladores y autoridades provinciales pusieran en manos de los interventores partidarios sus renunciaciones, quienes serían los encargados de observar si existía o no "la necesidad de efectuar depuraciones internas entre dirigentes y afiliados."⁴⁰ Primaba, por cierto, la concepción de que los cargos públicos y los mandatos electivos no pertenecían a los hombres sino al partido: "Aquí, en el Movimiento Nacional Justicialista, -sostenía el secretario general del

³⁸ Diario *Córdoba*, 12-11-74.

³⁹ Archivo General de la Provincia de Córdoba, Año 1974, T.76, Decreto 5004, 14-10-74.

⁴⁰ Diario *Córdoba*, 26-11-74.

CSMNJ, Jorge Camus- no hay grandes figuras y nadie puede arrogarse representatividad, porque los votos son del partido".⁴¹ De esta forma, los mandatarios provinciales dependían de sus respectivas situaciones ante el Consejo Superior, máxima autoridad partidaria, convirtiendo al peronismo en juez del desempeño de los funcionarios públicos, con un poder equivalente o superior a la del Ministro del Interior.

La supresión de las unidades básicas, por otra parte, cerraba así uno de los canales de participación y movilización de las bases, eliminando posibles gérmenes de "izquierdización" dentro del movimiento.

No obstante, la intransigencia de Lacabanne a incorporar hombres del peronismo local incrementó las fricciones internas hacia el interior del partido. La situación se tornó más complicada con el alejamiento de varios de sus leales colaboradores. Entre ellos, la renuncia abrupta del jefe de Policía de la Provincia Héctor García Rey que extendió la incertidumbre y la confusión acerca del futuro político de Lacabanne. No menos importante fue el desplazamiento de Bernabé Bárcena de la conducción de la CGT local, quien había sido uno de sus principales soportes. Las nuevas autoridades de la central obrera optaron por guardar cierta equidistancia con el jefe del Poder Ejecutivo. Defendieron la independencia de la acción sindical para ejercitar presión sobre el gobierno y negociar su participación en el esquema de poder.

Si bien, hubo intentos de Lacabanne de armar una coalición de poder, incorporando a algunas de las principales figuras de la dirigencia peronista en el gobierno y reestableciendo las relaciones con el partido y el bloque de legisladores justicialista, no alcanzó para revertir un proceso de creciente deterioro de un gobierno cuya fuerza residía, solamente, en el poder represivo.

El interventor Federal buscó descansar su credibilidad en el "éxito" conseguido en la lucha contra la subversión, utilizada como instrumento de propaganda y de presión para asegurar su continuidad en el gobierno provincial. Fueron frecuentes las expresiones relativas a que, si bien, había logrado liquidar a los focos guerrilleros y subversivos de la "Córdoba marxista", estos podían reaparecer bajos formas mutantes y solapadamente en distintos campos de la sociedad cordobesa.

El cambio de la correlación de fuerzas a nivel nacional, con la designación de Italo Luder como presidente en la Cámara de Senadores de la Nación y la posterior licencia de la presidente, reemplazada interinamente por titular de Cámara Alta, modificó desfavorablemente la posición del Interventor Federal en Córdoba. El 19 de septiembre el gobierno nacional dispuso el cese de las funciones de Lacabanne, designando en su reemplazo a Raúl Bercovich Rodríguez.

Ante los temores de un nuevo "navarrazo" a raíz de las declaraciones del Interventor saliente,⁴² el presidente provisorio de la Cámara de Senadores, en ejercicio de funciones del Poder Ejecutivo, designó interinamente en el gobierno provincial al Comandante del III Cuerpo de Ejército, General Luciano Benjamín Menéndez, hasta tanto se hiciera cargo de la titularidad el nuevo Interventor Federal. Lacabanne no dejó de revelar una vez más su pensamiento al señalar: "Tengo el honor de transmitir este mando a un argentino y no a un infiltrado."⁴³

⁴¹ Diario *Los Andes*, Mendoza, 12-12-74.

⁴² Días antes de su relevo, Lacabanne realizó declaraciones que alertaron a las nuevas autoridades. Fueron frecuentes frases como: "Yo estoy en guerra, y quiero que Uds. conozcan mi posición"; "Les aseguro que a mí no me va a relevar ningún ministrato"; "Mi plan consiste en lograr que la Intervención se extienda a los poderes legislativos y judicial". Diario *La Opinión*, Buenos Aires, 9-9-75.

⁴³ Diario *La Voz del Interior*, Córdoba, 20-9-75.

De esta forma, las expresiones de Lacabanne no dejaban de hacer explícito, una vez más, la impronta que otorgó a su gestión. La escena pública fue militarizada y las fuerzas de seguridad tuvieron una gravitación sin precedentes en el período. Designar por un día al Comandante del III Cuerpo de Ejército para garantizar el orden constitucional, estando en funcionamiento la legislatura provincial, demostraba la legitimación otorgada por el poder civil a la intervención de las fuerzas armadas para resolver los conflictos del campo político.

4.2. Raúl Bercovich Rodríguez: “no venimos a perseguir”

El 20 de septiembre, asumió Raúl Bercovich Rodríguez. Su designación, anunciada el día 18, había sido decidida nueve días atrás en una reunión de altos dirigentes gremiales y políticos del justicialismo. La reunión había contado con la presencia del titular de las "62 Organizaciones", Lorenzo Miguel y el vicepresidente 2º del Congreso Nacional Justicialista, José Báez, además de Alfredo Martini, delegado regional de la CGT-Córdoba, Mauricio Labat, secretario general de las "62 organizaciones" de la provincia y Julio Antún de la MRPP. También asistió el Ministro de Bienestar Social de la última etapa del gobierno de Lacabanne e integrante de la mesa nacional de las "62 Organizaciones", Cataldo Quatrochi. No quedaban dudas acerca de los sectores que sustentaban el nombre de Bercovich Rodríguez.

La oposición, por su parte, también aprobó el recambio del delegado al Poder Ejecutivo, al señalar que veían con complacencia el retiro del titular de la intervención. “Su presencia era altamente irritativa. Este primer paso en el cambio institucional es positivo.”⁴⁴

La gran influencia política ganada por el sindicalismo ortodoxo lo convirtió en el pilar fundamental de la nueva etapa del gobierno provincial. La ingerencia en los asuntos del Estado se manifestó a través de la participación de gremialistas en los órganos de conducción del gobierno. El mismo interventor reconocía la activa participación del gremialismo en su gobierno y "el apoyo total de la CGT y las "62", cuyos titulares no sólo eran amigos, sino también, compañeros.⁴⁵

El nuevo interventor debía hacerse cargo y resolver una situación delicada y compleja. Ante la crisis económica desatada por el shock inflacionario que habían generado las medidas del ex ministro de economía, Celestino Rodrigo, el clima de tensión social, violencia política y, el creciente desprestigio de la administración peronista, Bercovich Rodríguez procuró implementar una tregua social para recuperar la capacidad estatal de procesar los conflictos. Así lo manifestó Bercovich Rodríguez en su discurso de asunción:

“Quiero significarles a Uds. que vengo en tren de paz, queremos tranquilidad, queremos una sana convivencia, queremos la más absoluta libertad porque solamente en un clima de paz, de orden y disciplina se puede trabajar y se pueden llevar a cabo grandes realizaciones (...). No venimos aquí a perseguir. Venimos a gobernar (...), todo dentro de la ley, nada fuera de la ley.”⁴⁶

El tono aperturista con que se perfiló la nueva gestión cosechó buenas críticas por parte de los sindicalistas, los partidos políticos, legisladores e incluso la prensa. Sin embargo, su gobierno se desarrolló en el marco del Estado de sitio, decretada el 6 de noviembre

⁴⁴ Diario *La Voz del Interior*, Córdoba, 22-9-75.

⁴⁵ Diario *La Voz del Interior*, Córdoba, 20-9-75.

⁴⁶ Diario *La Voz del Interior*, 21-9-75. El subrayado es mío.

de 1974, medida que implicaba la suspensión de ciertas garantías constitucionales, liberando el camino a la participación de las Fuerzas Armadas y asegurando la continuidad del accionar de los grupos parapoliciales clandestinos. Fue en este período donde se puede registrar con mayor intensidad la “escalada terrorista” y la actuación conjunta entre el Comando de Libertadores de América y el Tercer Cuerpo de Ejército. Ya desde septiembre de 1975 quedaba claro que la premisa era “aniquilar a los delincuentes subversivos.”⁴⁷ En cuanto a la magnitud de la represión previa al golpe de estado de 1976, la Conadep-Córdoba afirma que entre diciembre de 1975 y marzo de 1976, se concentraron la mayoría de las 52 denuncias de secuestro de personas, seguida de desaparición permanente.

La escena pública comenzó a ser cercenada y los sujetos que sufrían directamente la represión e intimidación alternaron distintas formas de protesta, repudio y reclamos exigiendo respuestas sobre el destino de los familiares. Así, se organizaron marchas de silencio, asambleas, conferencias de prensa, difusión de documentos, publicación de solicitadas, paros, reuniones con personalidades políticas y eclesiásticas etc. El gobierno de la intervención era señalado como el responsable directo, criticado por permitir la impunidad de los secuestros.⁴⁸

La respuesta del gobierno, por su parte, centraba sus explicaciones en que se trataba de una violencia heredada, con la presencia de grupos armados antagónicos, pero que, con el accionar de la policía y de las Fuerzas Armadas, habían logrado erradicarlos en un 90%. El 10% restante era, en palabras del Interventor, el que estaba produciendo “estos hechos repudiables.”

En rigor de verdad, mientras la violencia y el terror dominaban las calles cordobesas, con la anuencia del gobierno de la intervención, este, a su vez, estaba sumergido en las disputas en torno a las elecciones internas, fijadas, en principio, para el 28 de marzo de 1976. En la interna partidaria se debía, en primer lugar, promover la normalización del partido, pero, en segundo lugar, debía resolver la cuestión de la candidatura para la próxima elección provincial prevista para 1977.

En esta dirección se ubicaron los esfuerzos de una nueva corriente "Afirmación Peronista" formada en Córdoba a fines de septiembre del '75 como resultado de las iniciativas encabezadas desde varios meses atrás por el senador provincial, Luis Pereyra, y el diputado provincial, Fausto Rodríguez. Esta línea intraperonista que bregaba por la autocrítica y la necesidad de impulsar cambios en el gobierno y en el partido para cerrar "el camino al golpismo totalitarista,"⁴⁹ aspiraba acceder al control del aparato partidario en virtud del llamado "proceso de normalización, democratización e institucionalización de justicialismo cordobés" emprendido por el Triunvirato Normalizador Interventor del Movimiento Nacional Justicialista-Distrito Córdoba.⁵⁰

La línea oficialista orientada por Bercovich Rodríguez contaba con la adhesión del movimiento Afirmación Peronista, cuya posible candidatura sería acompañada por Cataldo Quatrochi. En la oposición, Julio Antún y la Mesa Redonda Permanente Peronista, eran apoyados por el grupo de "De pie junto a Isabel."⁵¹

⁴⁷ Silvina Oviedo y Carol Solís, *Violencia institucionalizada y formas de resistencia: Los organismos de derechos humanos en Córdoba durante la dictadura*, Tesis de Licenciatura en Historia, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, 2006.

⁴⁸ *Ibídem*

⁴⁹ *Diario La Voz del Interior*, Córdoba, 12-2-76.

⁵⁰ El Triunvirato Normalizador-Interventor en el Movimiento Nacional Justicialista-Distrito Córdoba estaba integrado por Mauricio Labat (Secretario General de las "62" de Córdoba); Julia Peñaloza de Couzo (dirigente de origen frondicista) y Tránsito Rigatuso (uno de los jefes de la extrema derecha).

⁵¹ La agrupación interna "De pie junto a Isabel" agrupaba a legisladores nacionales, provinciales y dirigentes sindicales, como Herminio Iglesias, Intendente de Avellaneda. En Córdoba se constituyó a

Ciertamente, estas disputas confluían en un escenario paradójico y maquiavélico. Mientras aumentaban las denuncias por secuestros y desapariciones de personas, el gobierno se mostraba más preocupado por su continuidad en los órganos del poder estatal que encauzar institucionalmente la crisis desatada por la violencia política. Por cierto, todo parecía indicar que la expectativa del Interventor era perpetuarse en el poder, construido sobre los cimientos del terror y la impunidad. Hoy, el nombre del ex Interventor Federal, es recordado en una pequeña plazoleta pública ubicada sobre la transitada Av. Leopoldo Lugones, a metros de la Plaza España, pleno barrio de Nueva Córdoba.

5. Conclusiones

1973 se abrió al calor de la euforia democrática. La victoria del peronismo fue una fiesta popular y la movilización callejera su principal invitada. Se impuso el tono triunfalista alentado por el ansiado retorno del líder. Su vuelta era esperada con expectativa, optimismo, anhelo, casi a modo de revancha por los 18 años de proscripción, pero también con proyectos disímiles y contradictorios. El 20 de junio, fecha histórica en que se sustanció el retorno de Perón, quedó plasmado que había, al menos, dos peronismos, incompatibles y mutuamente excluyentes. La forma que adquirió la lucha se impuso sobre la movilización y la interna comenzó a dirimirse a los tiros.

Luego de Ezeiza, la escena política quedó dominada por la lucha de tendencias dentro del peronismo: Montoneros y la izquierda peronista absorbieron a todos los que, de una u otra manera, se identificaron con la “patria socialista”, mientras que, su contrario, la “patria peronista” acogió a todo el espectro de la derecha política y sindical, dispuestos a frenar el avance de los “infiltrados”.

Perón, una vez lograda la concertación social y asegurada la transición a la presidencia luego de la renuncia del presidente electo Héctor Cámpora, inició una ofensiva para desplazar a la izquierda peronista de los órganos de gobierno. El llamado a la institucionalización del movimiento estaba orientado hacia ese objetivo que, en gran parte, pretendía excluir el ala rebelde del movimiento.

La destitución del gobernador y vicegobernador de Córdoba por medio de un golpe policial que no fue condenado por el gobierno nacional se enmarca en esa línea de acción que impulsó el presidente Perón. Implicaba una acelerada purga ideológica que cubría, paralelamente, varios frentes, entre ellos, los gobernadores que contaban con el apoyo de la izquierda peronista. Córdoba, en términos del Presidente, resultaba un “foco de infección” a la que valía aplicarle una “dura medicina” para crear los “anticuerpos”: “Dejemos que esos gérmenes patológicos generen los anticuerpos que suelen entrar en nuestras organizaciones, pero tengamos la precaución de no dejar avanzar mucho las infecciones porque, indudablemente, cuando estas infecciones llegan a cierto grado no se dominan ni aún con penicilina.”⁵²

Mientras tanto, el gobierno de Obregón Cano tuvo que afrontar varias dificultades que se desplegaron en más de una escena. La polarización resultante del enfrentamiento intraperonista se articuló con la disputa por la conducción de la CGT regional, a la que se sumó la interna policial, el conflicto con la iglesia y las medidas de fuerza de los ganaderos. La posición moderada del “conductor benévolo” en la que se ubicaba el

finis de febrero de 1976 siendo algunos de sus integrantes los dirigentes Lorenzo Gatica, José María Flores (Dip. Nacional), Víctor Mazza, José Manuel de la Sota, Miguel Flores y Haydee Giri.

⁵² Diario *La Voz del Interior*, Córdoba, 25-5-74.

primer mandatario provincial no pudo contener las fuerzas centrífugas que afectaban profundamente la eficacia de su gobierno.

Ciertamente, la política conciliatoria del gobernador cordobés, más desarrollada hacia fuera del partido, que hacia adentro, resultaba contradictoria con la acentuación de los antagonismos que cruzaba la lógica de acción del resto de los actores.

La lógica de los conflictos reposaba en las concepciones dominantes de lo que significaba hacer y ejercer la política en aquellos años. Estrechamente vinculada al poder, la actividad política era la arena donde se evidenciaba la confrontación de relaciones de fuerza que disputaban la hegemonía del poder. Desde esta perspectiva, lo central de la lucha política era conquistar el poder, pensado como un lugar a ocupar, como una fortaleza encarnada en el Estado, núcleo visible del poder político y social.

La centralidad del Estado fue particularmente clave en la década del setenta y la lucha por su transformación fue el eje del pensamiento y la acción política. Los enfrentamientos respondían a la lógica bipolar que comprendía la disputa entre dos modelos de hegemonía, el capitalismo occidental y el socialismo. Como bien señala Pilar Calveiro, esta forma de pensar y organizar la política promovió la racionalidad y clasificación binaria y su forma de expansión y/o de defensa fue la guerra.⁵³

La violencia aparecía en la base misma de la política, fundándola y extendiéndose a través de ella, de manera que los vínculos entre el poder político y la violencia se manifestaban de forma abierta, y de alguna manera, legitimada por gran parte de los actores sociales y políticos de la sociedad argentina. La violencia en tanto herramienta para obtener un objetivo dominador, era el instrumento utilizado para resolver los conflictos y disensos internos. La represión, el asesinato político, la violencia estrictamente física, el uso de la fuerza utilizada principalmente por el Estado pero también por otros actores constituyeron un recurso político “aceptado”.

En este sentido, si la lucha política de los movimientos armados de los años setenta se organizó bajo los términos de oposiciones binarias, concebidas como confrontación entre enemigos, la violencia desplegada en toda la sociedad fue siempre superada por la violencia estatal. Las distintas formas de la violencia revolucionaria que intentaban constituir nuevas relaciones de poder, se enfrentaron a la violencia estatal que intentaba conservar el orden del status quo. La eliminación del disenso por intermedio de la fuerza fue legitimada y asegurada por quienes desde la cúpula del Estado se propusieron eliminar al adversario, devenido en enemigo.

El experimento “cordobés” de febrero de 1974 fue uno de los episodios más importante que demostró que cualquier método resultaba válido para llevar adelante la “limpieza” de los sectores de la izquierda y dirimir, de ese modo, la contienda intraperonista.

El “navarrazo” no sólo fue la contracara del “cordobazo” para imponer disciplinamiento a una sociedad movilizada, fue también el preanuncio, temprano, del derrumbe de la democracia.

⁵³ Pilar Calveiro, *Política y violencia. Una aproximación a la guerrilla de los años 70*, Buenos Aires, Grupo Editorial Norma, 2005.